

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA
DEMANDADO	DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA S.A.S. – REFIAANTIOQUIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN
RADICADO	05308-31-03-001-2018-00181-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Despido indirecto, salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, aportes a seguridad social.
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso ordinario laboral, promovido por el señor **ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA** contra la sociedad **REFIAANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 008**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir, por parte de este colegiado, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra la sentencia proferida por el JUZGADO CIVIL CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO DE GIRARDOTA – ANT., en la audiencia pública celebrada el día el 28 de febrero de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso en síntesis que, el señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA se vinculó al servicio de la sociedad REFIANTIOQUIA S.A.S., el día 1° de enero de 2014, a través de un contrato de trabajo a término indefinido, para ocupar el cargo de “OPERADOR DE PLANTA”, y como último salario devengó la suma mensual de \$2.100.000.

Que la relación laboral finalizó el 1° de marzo de 2017, mediante renuncia voluntaria motivada en una justa causa, pues el actor se vio obligado a dimitir a su cargo, debido al sistemático incumplimiento que empezó a presentarse a partir 1° de septiembre de 2016, cuando se dejó de pagar salarios, prestaciones sociales, vacaciones, y aportes a seguridad social, viéndose compelido por la misma empresa a solicitar licencias no remuneradas.

Finalmente expone el escrito introductorio, que el actor citó al representante legal de la sociedad REFIANTIOQUIA S.A.S., a una audiencia ante el Ministerio de Trabajo el 13 de septiembre de 2017, en la que no se logró un acuerdo conciliatorio entre las partes, toda vez que la parte accionada se limitó a exponer que estaban en un proceso de reestructuración económica ante la SUPERSOCIEDADES, el cual no resultó ser cierto.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: Que se declare la existencia de un contrato de

trabajo entre el señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA y la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA S.A.S. – REFIANTIOQUIA S.A.S., cuyos extremos temporales estuvieron comprendidos entre el 1° de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017, el cual finalizó por justa causa imputable al empleador, que la sociedad REFIANTIOQUIA S.A.S. no efectuó el pago de los salarios entre el 1° de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017, descontando 30 días de licencias no remuneradas, las cesantías e intereses a las cesantías causadas entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017, y las del 1° de enero de 2017 al 28 de febrero de 2017, tampoco canceló la prima de servicios del segundo semestre de 2016, y la prima proporcional por lo corrido del año 2017, las vacaciones causadas desde el 1° de enero de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017, los aportes a seguridad social en salud y pensiones desde el 1° de julio de 2016 y hasta el 28 de febrero de 2017, en consecuencia, se CONDENE a la sociedad REFIANTIOQUIA S.A.S., al reconocimiento y pago de estos conceptos, así como a la indemnización por despido injusto, la indemnización por la no consignación del auxilio de cesantías a un fondo, la indemnización moratoria del art. 65 del CST., y las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda, y corrido el traslado de rigor correspondiente, la demandada REFIANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN, dio respuesta oportuna, a través de su apoderado judicial (folios 2 al 10 del archivo PDF N° 05), indicando frente a los hechos allí narrados, que son ciertos aquellos que aluden a la existencia de una relación laboral con el demandante regido por un contrato de trabajo a término indefinido y sus extremos temporales, que no es cierto el incumplimiento en las acreencias laborales, y que por el contrario, la empresa siempre efectuó el pago de las obligaciones que le incumbían en la medida de sus posibilidades económicas, y que aquellos periodos en que el actor estuvo en licencia no remunerada, obedecieron a un acuerdo de voluntades en el que no medio error, fuerza o dolo, finalmente admite la realización de una audiencia ante la autoridad administrativa, aclarando que en ese momento se estaban adelantando los trámites para ingresar a un proceso de reorganización empresarial; se opuso a la totalidad de pretensiones y

cargos, y formuló en su defensa las excepciones de mérito que denominó: “*PRESCRIPCIÓN; COMPENSACIÓN; y BUENA FE*”.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública de trámite y juzgamiento celebrada el 28 de febrero de 2022, la señora JUEZ DE CONOCIMIENTO profirió sentencia, DECLARANDO que la relación laboral existente entre el señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA y la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S., en LIQUIDACIÓN, se dio por terminada el día 1° de marzo de 2017, por decisión unilateral sin justa por parte del empleador. No obstante, también DECLARÓ parcialmente probada la excepción de “PRESCRIPCION”, en relación a los salarios, prestaciones sociales, vacaciones; e indemnizaciones.

CONDENÓ a la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S., en Liquidación, al pago de los aportes a la seguridad social en pensiones al señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA entre 01 de julio de 2016 y el 01 de marzo de 2017, teniendo en cuenta para ello salario base de cotización de \$2.100.000.

Por último, se abstuvo de imponer costas procesales en la primera instancia, al haber resultado avante una de las pretensiones formuladas.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que, de la prueba documental, testimonial e interrogatorios de parte practicados en la litis, quedó plenamente demostrado el trabajador renunció a partir del 1° de marzo de 2017, motivado en el no pago de salarios y prestaciones sociales por parte de su empleador (fls. 46 y 50).

Y en relación a la excepción de prescripción, manifestó que de un análisis ligero de este fenómeno jurídico podría colegirse que ninguno de los derechos reclamados se encuentra afectado por la prescripción establecida en los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, pues la relación laboral finalizó el día, 1° de marzo de 2017, el reclamo ante el empleador que interrumpió el término prescriptivo por una sola vez, se efectuó el 13 de septiembre de 2017, ante el Ministerio de Trabajo, y la demanda ordinaria laboral fue presentada el día 3 de agosto de 2018.

No obstante, como la entidad accionada propuso la prescripción establecida en el art. 94 del CGP aplicable en materia laboral y seguridad social en virtud del art. 145 del CPTSS, la *A Quo* entró a analizar si la parte demandante se había demorado en notificar el auto admisorio al demandado, y si esta obedeció a la negligencia y descuido de la parte demandante, o si por el contrario se dieron otras circunstancias de fuerza mayor.

Concluyendo frente a ello, que las gestiones de notificación físicas que se surtieron conforme al procedimiento establecido en el CPTSS y antes de iniciar la pandemia del covid-19, fueron oportunas y diligentes, sin embargo, no ocurrió lo mismo con el trámite de notificaciones electrónicas regido por el Decreto 806 de 2020, pues al aceptarse la solicitud de notificación al liquidador que hiciere el apoderado del demandante, y una vez levantada la suspensión de términos judiciales, la parte demandante solo hasta el 22 de octubre de 2021 intentó la notificación al liquidador de la sociedad REFANTIOQUIA S.A.S., evidenciándose una tardanza injustificada de por lo menos 14 meses, superándose así el término de un (1) año establecido en el art. 94 del CPTSS, Motivos por los cuales se declaró prospera la prescripción de la acción frente aquellos derechos prescriptibles.

También manifestó en su sentencia, que en el presente asunto no opera la suspensión de la prescripción a la que alude el numeral 8° del art. 50 de la Ley 1116 de 2006, pues esta suspensión solo aplica para obligaciones que se encuentren en el proceso de insolvencia económica, y no para cualquier crédito, que apenas se está debatiendo en un proceso judicial ordinario.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Su apoderado judicial dice no estar de acuerdo con la forma en la que se resolvió la excepción de prescripción por parte de la *A Quo*, pues en su sentir existe norma expresa para analizar la procedencia o no de la excepción propuesta, el art. 151 del CPTSS establece un término de tres (3) años para contabilizar la prescripción, mismos que según refiere debían computarse desde el 13 de septiembre de 2017, cuando el demandante presentó reclamación ante el Ministerio del Trabajo.

También insiste en la aplicación del numeral 8° del art. 50 de la Ley 1116 de 2006 (insolvencia económica), pues esta normativa dispone que desde el momento en que se decreta la apertura de la liquidación, se interrumpe la prescripción y se hace inoperable la caducidad, lo anterior de manera objetiva y general, es decir, no se requiere que el aquí demandante haga parte del proceso de liquidación, y sumado a ello, el art. 72 ibídem también alude a la suspensión de la prescripción por aquellos créditos que estén pendientes de pago antes de iniciarse el proceso.

Y que contrario a lo colegido por la juez de primer grado, el demandante sí se hizo parte del proceso de liquidación judicial, antes de proferirse el auto de apertura de la liquidación, frente a este último tópico, debe tenerse presente lo confesado por el liquidador, pues este en su interrogatorio de parte aceptó que el demandante estaba en el listado de las personas que hicieron parte del proceso de liquidación. Motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia objeto de apelación, en cuanto declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, y en su lugar se acoja la totalidad de pretensiones formuladas.

Alegatos de conclusión

El apoderado judicial del demandante expone en sus alegatos de instancia que es indiscutido que uno de los efectos inmediatos que produce el auto de apertura de liquidación judicial de una empresa es la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad de todas las obligaciones a cargo del deudor, siempre que hubieran sido exigibles antes del inicio del proceso de liquidación, consecuencia ineludible prevista en el régimen de insolvencia (normatividad estatutaria) de la Ley 1116 de 2006.

Que tratándose de normas especiales estatutarias sobre procesos de insolvencia que consagran causales especiales de interrupción de la prescripción extintiva de los créditos contra el deudor y demás terceros llamados a responder por la obligación, es claro que éstas prevalecen sobre la genérica prevista en el artículo 94 del Código General del Proceso, y por ello debe revocarse la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de prescripción extintiva, pues desconoció que ésta quedó

objetivamente interrumpida con el auto de apertura de liquidación judicial de la empresa demandada, desde el 29 de marzo de 2019 y cuando aún no habían transcurrido los tres años previstos en la legislación laboral desde la exigibilidad de los derechos laborales del demandante, y hasta que culmine dicho proceso, como lo mandan los artículos 50 #8 y 72 de la Ley 1116 de 2006; y que, por demás, éste sí se presentó oportunamente a hacerse parte como acreedor dentro del proceso.

Expone que si fuera válido entender que la interrupción de la prescripción sólo abriga a quienes se hacen parte del proceso de insolvencia, y nadie más, el legislador no habría extendido esos mismos efectos a todos los demás terceros que deban cumplir la obligación, sabiéndose que éstos no son ni serán nunca parte dentro de dicho proceso y que nada impide legalmente que cualquier acreedor pueda accionar contra ellos posteriormente en proceso separado.

Finalmente insiste en la mala fe de la empresa accionada, y dice estar conforme con la condena al pago de aportes a seguridad social.

A su turno, el apoderado judicial de la sociedad accionada, señala que en el asunto de la referencia se configuró la prescripción extintiva, regulada en el art. 488 del C.S.T. y en el art. 151 del C.P.T.S.S., sobre la totalidad de los derechos reclamados, por haber transcurrido más de 3 años entre el momento en que se hicieron exigibles los derechos reclamados y la fecha en la que se produjo la interrupción judicial de la prescripción. Por regla general, la prescripción puede ser interrumpida judicialmente desde la fecha en la que se presenta la demanda con la que se reclaman los derechos de orden laboral que pueden llegar a verse afectados por este fenómeno.

Esta forma de interrupción no es automática, pues la legislación procesal civil, aplicable en materia laboral producto de la ausencia de regulación expresa en el C.P.T.S.S., y por mandato del Art. 145 de esta última codificación, impone una carga a la parte que pretenda beneficiarse de esta prerrogativa. La aludida carga se encuentra prevista en el Art. 94 del C.G.P., el cual establece que si se quiere interrumpir la prescripción con la presentación de la demanda, la parte demandante debe notificar a la parte demandada el auto admisorio de la

demanda dentro del año siguiente su notificación por estados; y que en caso tal de que no se cumpla con esta carga, la interrupción de la prescripción sólo se generará a partir de la fecha efectiva en la que se produzca la notificación del auto admisorio de la demanda a la parte demandada.

De otro lado, expone que la buena fe es un elemento que impide que se efectúe la condena a indemnizaciones o sanciones moratorias y la existencia de esta en el actuar de la sociedad demandada, y lo confesado por el propio demandante y el liquidador, quienes dejaron entrever que el no pago de acreencias laborales se debió a una iliquidez económica de la empresa, y no la intención de querer defraudar a sus trabajadores.

Finalmente señala el apoderado judicial de la parte demandada que a efectos de salvaguardar el precedente horizontal, se tenga en cuenta un caso análogo (05308-31-05-001-2019-00270-01) donde este mismo Tribunal de Distrito Judicial con ponencia del Dr. Víctor Hugo Orjuela Guerrero, confirmó la sentencia absolutoria en cuanto declaró probada la excepción de prescripción.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Relación laboral, despido indirecto, acreencias laborales, prescripción de la acción, empleador en liquidación judicial.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El problema jurídico a resolver, teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación por la activa, mismos que delimitan la competencia de la Sala en la

segunda instancia, consisten en dilucidar en primer lugar si la acción judicial formulada por el señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA se encuentra o no afectada por el fenómeno de la prescripción en los términos del art. 94 del Código General del Proceso, y los arts. 50 numeral 8° y 72 de la Ley 1116 de 2006, que regulan lo relativo la interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora, los efectos de la apertura del proceso de liquidación judicial y la interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad en el proceso de liquidación judicial de una sociedad.

En segundo lugar, y solo en caso de no salir avante la excepción de prescripción de la acción, propuesta por el apoderado judicial de la sociedad DISOLVENTES Y PETRÓLEOS DE ANTIOQUIA S.A.S. – REFIAANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN, pasará la Sala analizar la procedencia de aquellas pretensiones que fueron cobijadas por la declaratoria de prescripción parcial.

Lo anterior, dado que en el proceso no existe discusión en torno a los siguientes puntos:

- La vinculación laboral del señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA con la sociedad REFIAANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN, a través de un contrato de trabajo de trabajo que finalizó por decisión unilateral sin justa por parte del empleador.
- Los extremos temporales.
- La modalidad contractual.
- El salario devengado.
- La existencia de un proceso de liquidación judicial en el que se encuentra inmersa la sociedad REFIAANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN.
- La existencia de una mora en el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones al señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA entre 01 de julio de 2016 y el 01 de marzo de 2017.

Lo anterior por cuanto lo resuelto y condenado frente a estos tópicos, no fue controvertido en apelación por el apoderado judicial de la parte demandada REFIAANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN, y por ello no podrán ser objeto de

un nuevo análisis en virtud del principio de consonancia al que alude el art. 66 A del CPTSS.

Prescripción de la acción.

Para resolver debe recordarse que las diferentes normas que rigen los procesos judiciales consagran la figura de la prescripción como un fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el solo transcurso del tiempo, y concretamente en materia laboral este fenómeno jurídico es extintivo del derecho, pues corresponde a un periodo de tiempo durante el cual el trabajador puede interponer las acciones legales para obtener el pago de sus derechos laborales, teniendo la posibilidad durante este periodo de tiempo reclamar por escrito ante su empleador el derecho o prestación económica, momento en el cual se interrumpe la prescripción, es decir que el periodo establecido legalmente para que opere este fenómeno jurídico, se contabiliza nuevamente, a partir de la reclamación, tiempo durante el cual puede accionar al empleador, so pena de que el derecho de acción se entienda extinto por el paso del tiempo.

Esta institución jurídica tiene regulación expresa en materia laboral y seguridad social, como es el caso de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, los que establecen el término de tres (3) años para que opere la prescripción extintiva en materia de derechos sociales. Al tenor de dichas disposiciones, estableció el Legislador:

“Artículo 488 CST. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.

“Artículo 151 CPT y SS. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

Disposiciones que determinan la extinción del derecho desde su concepción sustancial y la acción desde la óptica procedimental, en el término de tres (3) años. Tal justificación ha sido acogida por las altas corporaciones jurisprudenciales; verbi gracia, la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 1993, sentencia de constitucionalidad en la que se analizó la conformidad a la carta de las dos disposiciones normativas citadas, expresó que: *“...el núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta. El núcleo esencial del derecho al trabajo no solo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas...”*.

La teleología que subyace a la existencia de la prescripción extintiva, se inspira en razones de orden público y paz social, como valores en los cuales la sociedad se encuentra interesada, a fin de que se consoliden las situaciones jurídicas sobre los derechos, y se genere la lógica consecuencia de la extinción cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo.

Tal postura goza de una pacífica aceptación en la jurisdicción laboral, a partir de los reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha sostenido que *“...en asuntos judiciales de carácter social, el término de prescripción es de 3 años, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código procesal del Trabajo y de la Seguridad Social...”* (sentencia 27.365 del 19 de octubre de 2006), entendimiento que también puede verse en la sentencia SL-5159 de 2020:

“...Sin desconocer el espacio fáctico de la acusación y como esta conmina a la Sala a determinar el momento a partir del cual comienza a contar el término de prescripción de las acreencias laborales reclamadas, es pertinente reiterar que acorde a lo estatuido en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, las acciones correspondientes a los derechos laborales prescriben en tres años que se cuentan a partir del momento en que cada uno se hizo exigible (CSJ SL13155-2016, CSJ SL 1785-2018 y CSJ SL2885-2019), de modo que quien exija una prestación social deberá alegarla en el término establecido, en

cuyo caso, basta «el simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador», para que por una sola vez se entienda interrumpida y comience a correr de nuevo el término por un lapso igual al inicialmente señalado...”

CASO CONCRETO

Descendiendo al presente asunto es evidente para la Sala que el demandante ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA, en principio, no dejó transcurrir el término prescriptivo al que aluden las normas citadas, toda vez que desde la fecha en que se hicieron exigibles los derechos reclamados (1° de marzo de 2017), y la fecha de la reclamación ante el empleador que hizo las veces de interrupción del término prescriptivo (13 de septiembre de 2017 - audiencia de conciliación ante el Ministerio del Trabajo¹), no pasaron más de 3 años, como tampoco entre esta última fecha y la fecha en que se presentó la demanda ordinaria laboral de la referencia (3 de agosto de 2018)².

Y es que teniendo en cuenta la interrupción de la prescripción, el actor tenía hasta el 13 de septiembre de 2020 para formular su acción judicial contra la sociedad REFIANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN.

No obstante, y aunque la demanda se presentó en oportunidad, para que esa interrupción de la prescripción produzca efectos indefinidamente mientras en curso el proceso judicial, el auto admisorio de la demanda se debía notificar al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante, conforme lo reglado en el art. 94 del Código General del Proceso.

En otras palabras, la autoridad judicial aceptará que la interrupción de la prescripción se dé desde el día de presentación del libelo, sólo si se cumple el requisito de que el auto admisorio sea notificado a la parte demandada en un tiempo máximo de un año contado desde que el actor se hubiera notificado de la admisión de la demanda. Si aquello no ocurre, el fenómeno prescriptivo solo se interrumpirá cuando se lleve a cabo la notificación de la demanda al demandado.

¹ Folios 50 archivo del PDF 01.

² Folios 4 del archivo PDF 01.

El auto admisorio en el sub lite data del 23 de agosto de 2018, y fue notificado por ESTADOS N° 087 del 24 de agosto de 2018³.

Por lo tanto, a partir del 24 de agosto de 2018, la parte demandante contaba con un año para notificar esa providencia al representante legal de la sociedad REFIANTIOQUIA S.A.S., Dr. Jorge Humberto Rendón Henao, pues para ese momento no se había dado apertura a la liquidación judicial de este empleador en virtud de la Ley 1116 de 2006, según se desprende el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 21 de agosto de 2018⁴.

El apoderado judicial de la parte demandante durante ese lapso envió tres citaciones para notificación personal a través de la empresa de correo SERVIENTREGA, según se observa a folios 75 al 80 y 90 del archivo PDF 01, con constancia de recibido por dos empleados de la empresa.

Sin embargo, y ante la no comparecencia del representante legal para notificarse personalmente del auto admisorio, el *A Quo* ordenó su emplazamiento en prensa y también dispuso el nombramiento de un curador ad litem mediante auto del 24 de mayo de 2019⁵.

En cumplimiento de lo anterior el apoderado judicial del demandante procedió a realizar la publicación en prensa del emplazamiento, y también gestionó la citación al curador ad litem para que este compareciera al despacho a notificarse, lo cual nunca sucedió

Luego mediante memorial de fecha 31 de enero de 2020, el apoderado judicial del demandante le anuncia al juzgado de origen que la sociedad demandada había entrado a un proceso de liquidación obligatoria bajo la ley de insolvencia económica (Ley 1116 de 2006) y que el nuevo representante legal y/o liquidador era el Dr. Álvaro Isaza Upegui, ante quien debía surtirse la notificación correspondiente⁶.

³ Folios 69 y 70 del archivo PDF 01.

⁴ Folios 59 al 68 del archivo PDF 01.

⁵ Folios 100 al 101 del archivo PDF 01.

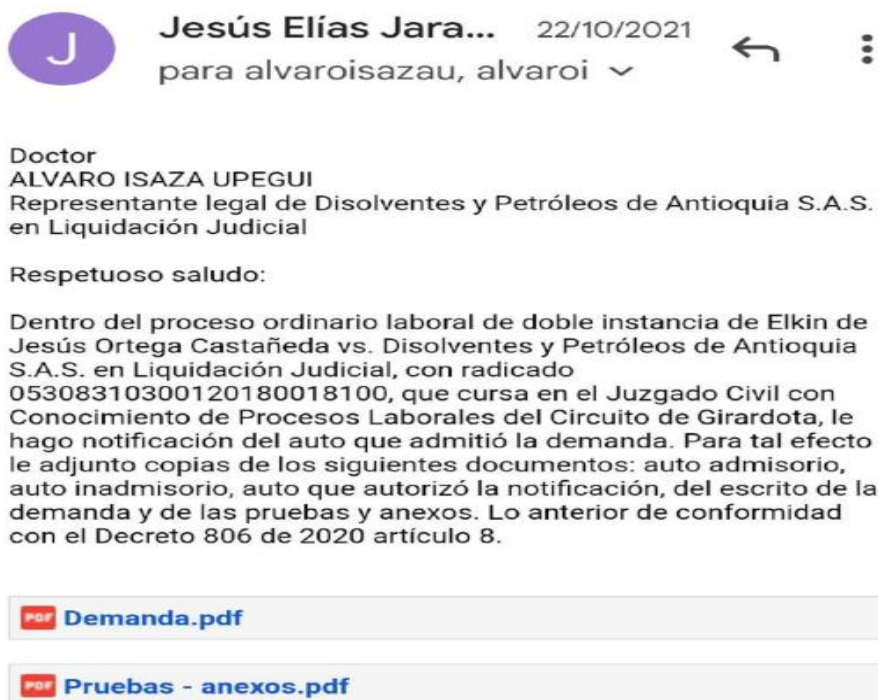
⁶ Folios 114 del archivo PDF 01.

En atención a lo manifestado por el apoderado judicial de la parte demandante, el *A Quo* mediante auto del 17 de febrero de 2020, accedió a notificar el auto admisorio al Dr. Álvaro Isaza Upegui, esta decisión quedó notificada en los ESTADOS N° 23 del 18 de febrero de 2020.

El 24 de julio de 2020, y habiéndose superado la suspensión general de términos judiciales producto de la pandemia del COVID 19 que aconteció entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, el apoderado judicial del demandante solicitó copia de la providencia que autorizó la notificación al Dr. Álvaro Isaza Upegui, con el fin de proceder con el diligenciamiento de la notificación⁷.

Ante la inactividad de la parte demandante para efectuar la notificación correspondiente al Dr. Álvaro Isaza Upegui, la *A Quo* mediante auto del 15 de septiembre de 2021, requirió al apoderado judicial del demandante, instándolo a realizar la respectiva notificación, preferiblemente por medios electrónicos conforme lo previsto en el artículo 8° del Decreto 806 de 2020⁸.

Y finalmente en el archivo PDF 10, obra constancia de la notificación electrónica realizada al Dr. Álvaro Isaza Upegui el día **22 de octubre de 2021**, así:



⁷ Archivo PDF 02.

⁸ Archivo PDF 03.

Visto lo anterior, es claro para la Sala que la parte demandante presentó una tardanza injustificada en notificar el auto admisorio de la demanda al liquidador de la sociedad REFINTIOQUIA S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, pues entre la fecha en que se autorizó esta notificación y el momento en que fue concretada a través de medios electrónicos (art. 8° del Decreto 806 de 2020), pasaron más de 12 meses, ello sin tener en cuenta el periodo de suspensión generalizada de términos judiciales (Decreto 564 de 2020) que se extendió hasta el 30 de junio de 2020.

De lo antes expuesto, considera la Sala que fue el descuido de la parte demandante, el que propició el efecto adverso al que alude el art. 94 C.G.P., así se desprende del análisis detallados de las diligencias de notificación realizadas, pues era necesario establecer si la notificación no se realizó por negligencia del Juzgado o por actividad elusiva del demandado, tal y como lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como puede verse en la sentencia CSJ SL8716-2014, reiterada luego en la sentencia CSJ SL3904-2019, donde se concluyó lo siguiente:

“...Frente a dicho tema, esta Sala de la Corte ha previsto en su jurisprudencia que entre la presentación de una demanda y su notificación pueden generarse diversas eventualidades, que no son imputables a quien funge como demandante y que, por lo mismo, no pueden redundar en su perjuicio. En tal orden, contrario a lo argüido por la censura, ha admitido excepciones a la regla prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y, concretamente, como lo dedujo el Tribunal, ha aceptado que «...la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado...»

Dichas excepciones a la regla de interrupción de la prescripción están fundadas en la prevención de conductas reprochables desde todo punto de vista, que tienden al abuso de la disposición por parte de los deudores y, en materia laboral, en una protección especial para el trabajador que acude a tiempo a reclamar sus derechos y que realiza todas las acciones que están a su alcance para lograr la notificación de la demanda, por lo que no se le puede sancionar con la prescripción, a pesar de haber actuado diligentemente...”

En este contexto normativo y jurisprudencial, revisado todo el trámite adelantado a efectos de lograr la notificación del auto admisorio de la demanda a la accionada, se advierte que la parte demandante tardó más de un año en notificar el auto admisorio de la demanda al liquidador de la sociedad accionada, desconociendo con ello la carga procesal que le correspondía, pues tal y como lo tiene adoctrinado la jurisprudencia del órgano de cierre en la especialidad laboral y seguridad social, a pesar de que los despachos judiciales son los encargados de adelantar el proceso ordinario laboral de manera eficaz y que, en términos generales, en el interior del mismo todas las actuaciones están sometidas al “*PRINCIPIO DE GRATUIDAD*”, las partes tienen ciertas cargas procesales que redundan en su propio beneficio, como es el caso de la notificación del auto admisorio de la demanda. En la sentencia CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 40549, la Corte explicó al respecto:

“...No obstante, el recurrente aduce que la falta de notificación a la parte demandada del auto admisorio de la demanda durante el término transcurrido del 9 de febrero de 2000 hasta el 18 de diciembre de 2003 no le es imputable, pues era de cargo del juzgado de conocimiento surtir todos los pasos necesarios para notificar su decisión admisorio, y esa ‘negligencia’, como la conducta ‘elusiva’ de la demandada, no pueden perjudicar su pretensión.

*Pues bien, para resolver el punto en discusión es suficiente recordar que ya la Corte ha asentado el criterio de que si bien es cierto que a la administración de justicia laboral compete adelantar de manera diligente y oportuna el proceso, para de esa forma hacer cierta la finalidad de pronta y cumplida justicia, ejerciendo para ello el poder - deber de dirigirlo, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir su paralización procurando la mayor economía procesal, a través de lo que es dado en llamarse ‘oficiosidad procesal’; y que es regla procesal del derecho laboral la de la gratuidad de los actos procedimentales a que se refiere el artículo 39 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, **también lo es que a las partes del proceso compete asumir ciertas cargas procesales, cuando quiera que sus resultados sólo obran en su propio beneficio o perjudican únicamente a quien elude asumirlas.***

Tal el caso del trabamamiento de la relación jurídico procesal que se impone como acto procesal necesario a efectos de garantizar el derecho de defensa y de contradicción de quien es convocado forzosamente al proceso y que, en principio, beneficia exclusivamente a quien funge como actor. Razón suficiente para entender que el artículo 90 del Código de

Procedimiento Civil, para la época, dispusiera que la presentación de la demandada tendría como efecto material, entre otros, la interrupción de la prescripción, siempre y cuando a la parte demandada se le notificara el auto admisorio de la demanda dentro de los 120 días siguientes a la notificación que, a su vez, de tal proveído se hiciera a la parte actora...”

De suerte que, el beneficio material que para el actor podría constituir la presentación de la demanda, de interrumpir la prescripción, se vio condicionado a que se surtiera respecto del demandado la notificación del auto admisorio dentro de un específico término, de modo que, de no ocurrir ello, dicho beneficio se perdería, prosiguiendo así su decurso normal el término previsto para la prescripción de la acción.

Desde tal perspectiva es que ha entendido la Corte la aplicación de la ‘oficiosidad procesal’ y la ‘gratuidad’ de particulares actos del proceso laboral, por manera que, ni ésta ni aquella tienen carácter absoluto, pues están limitadas por conceptos jurídicos como las llamadas ‘cargas procesales’, particularmente, para el trabamamiento de la relación jurídico procesal, la de facilitar la postura a derecho del demandado mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda, o, en su defecto, la de la notificación a través de curador ad litem, pasados 10 días de haberse cumplido aquella con la parte actora del proceso...” (Negrillas de la Sala).

Criterio jurisprudencial que acoge y comparte este tribunal, y dado que la sentencia de primer grado también se encuentra alineada en este mismo sentido, habrá de confirmarse lo allí resuelto por encontrarse ajustado a derecho y a la realidad fáctica vertida en la litis.

Interrupción de la prescripción – Ley 1116 de 2009 insolvencia económica.

Finalmente, respecto a la prescripción especial que reclama el apoderado judicial del demandante con fundamento en los art. 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006, estima la Sala que en el presente asunto no resulta procedente la interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad, dada la naturaleza del proceso judicial que se encuentra en discusión (ordinario laboral de doble instancia).

“ARTÍCULO 50. EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL. *La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce:*

(...)

8. *La interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de las acciones respecto de las **obligaciones** que contra el deudor o contra sus codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, **estuvieren perfeccionadas o sean exigibles** desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial.*

ARTÍCULO 72. INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN E INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD. *Desde el inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial, y durante la ejecución del acuerdo de reorganización o de adjudicación queda interrumpido el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso.*

Pues las citadas normativas aluden a la existencia de obligaciones que se encuentren perfeccionadas o sean exigibles desde antes del inicio del proceso de liquidación judicial, al igual que los créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso, y en el presente asunto no puede perderse de vista que las obligaciones reclamadas por el señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA, apenas se están discutiendo al interior de un proceso judicial de naturaleza declarativa, esto es, aquellos juicios que tienen por objeto declarar la constitución, modificación o extinción de un derecho o una relación jurídica, lo cual difiere de las obligaciones y créditos perfeccionados o exigibles a los que alude la Ley 1116 de 2006.

La Sala no desconoce que el demandante al igual que otros 12 trabajadores radicaron solicitud de reconocimiento de crédito laboral ante el liquidador de la sociedad REFIANTIOQUIA S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN el día 26 de noviembre de 2019, pues así lo reconoció el liquidador de esta sociedad Dr. ÁLVARO ISAZA UPEGUI en su interrogatorio de parte, pero independientemente que estos créditos laborales hayan sido objeto de calificación y graduación ante la Superintendencia de Sociedades, la interrupción del término de prescripción e inoperancia de la caducidad a la que aluden los arts. 50 y 72 de la Ley 1116 de 2006 de manera alguna se puede

trasladar al proceso ordinario laboral, pues dicha figura es propia del proceso de reorganización y/o liquidación judicial, lo anterior por cuanto dicha norma no hace alusión a los PROCESOS ORDINARIOS laborales que se encuentren en curso contra una sociedad que se hallará en reorganización y/o liquidación judicial, además, tampoco puede echarse de menos que la aplicación analógica de estos artículos resulta improcedente, debido al principio de plenitud hermética, toda vez que la legislación laboral tanto en lo sustancial como en lo procesal regula expresamente el fenómeno jurídico de la prescripción y su interrupción, lo que impide acudir a normas aparentemente análogas.

De otro lado, advierte la Sala que en el plenario no está acreditado que los créditos laborales sometidos a calificación y graduación ante la Superintendencia de Sociedades, sean equivalentes a las pretensiones solicitadas en la demanda ordinaria laboral de la referencia, donde también se reclama el reconocimiento de indemnizaciones por despido injusto, moratoria, y sanción por no consignación de cesantías a un fondo.

Así las cosas, se despacha desfavorablemente el recurso de apelación formulado frente a este asunto, y se confirmará lo resuelto por la funcionaria judicial de primer grado, al no existir más aspectos de la sentencia que deban ser estudiados en la alzada.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la improsperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandante, las costas procesales en esta instancia estarán a cargo del señor ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA y en favor de la parte demandada, según lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS M/L (\$300.000).

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación de fecha 28 de febrero de 2022 proferida por el JUZGADO CIVIL CON CONOCIMIENTO EN PROCESOS LABORALES DEL CIRCUITO DE GIRARDOTA – ANT., según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS procesales en segunda instancia a cargo del demandante ELKIN DE JESÚS ORTEGA CASTAÑEDA y en favor de la parte demandada, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS M/L (\$300.000).

TERCERO: en su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: Se ordena la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA